



GD-F-008 V.9

Página 1 de 9

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010047265 DEL 05/04/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

EL ASESOR QUE FUNGE COMO COORDINADOR DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300023445 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015, estableció que *“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007.”*

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300023445 del 24 de marzo del 2017, delegó en el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el Municipio de SANTIAGO del Departamento de PUTUMAYO, es de categoría 6 y como fue prestador directo de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6. y 2.3.5.1.2.1.7. del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010056535 del 30 de septiembre de 2016, la Superintendencia Delegada resolvió DESCERTIFICAR al Municipio de SANTIAGO del Departamento de PUTUMAYO, por no haber cumplido los siguientes requisitos establecidos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015:

- *“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complementa o sustituya”.*

- *“Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994”*



Que la referida resolución se notificó personalmente a la señora Sandra Milena Cabrera Osejo, en su calidad de autorizada del representante legal del Municipio de SANTIAGO - PUTUMAYO, el 11 de noviembre de 2016.

Que el Municipio de SANTIAGO - PUTUMAYO interpuso oportunamente recurso de reposición mediante escrito radicado SSPD 20165290795332 del 21 de noviembre de 2016, contra la citada resolución de descertificación.

2. ARGUMENTOS DEL ENTE TERRITORIAL Y DOCUMENTOS APORTADOS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN, EN RELACIÓN CON EL CARGO “REPORTE EN EL SUI EL ACUERDO DE APROBACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE SUBSIDIO Y APOORTE SOLIDARIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA VIGENCIA RESPECTIVA, EXPEDIDO DE CONFORMIDAD CON LOS PORCENTAJES SEÑALADOS EN LA LEY 1450 DE 2011 O LA NORMA QUE LO MODIFIQUE, COMPLEMENTE O SUSTITUYA”

2.1 De los argumentos del recurrente

2.1.1 Adujo el ente territorial, en primer lugar, que si la Superintendencia hubiera generado un trámite de pruebas dentro del proceso de certificación, se hubiera verificado a través del Decreto No. 0461 del 1 de septiembre de 1996, por medio del cual se adoptó la estratificación de la ciudad de Santiago, que no existen los estratos 5 y 6.

Señaló que, dentro del debido proceso y el derecho de defensa propio de nuestro estado social de derecho, las situaciones formales tenidas como base para la descertificación de Santiago, pudieron ser aclaradas con un periodo probatorio.

2.1.2 En igual sentido, indicó que esta situación pudo ser aclarada a través de la certificación expedida por el Secretario de Planeación Municipal, que hubiera podido hacer constatar que en el Municipio de Santiago - Putumayo, no existen inmuebles que tengan asignados estratos 4, 5 y 6, ni usos comercial e industrial”.

2.1.3 Aclaró que si bien, se incluyeron dichos estratos y usos en el artículo segundo del Acuerdo No. 04 de 2015, en lo relacionado con los porcentajes de contribuciones, dichas clasificaciones socioeconómicas no existen en el municipio, razón por la cual dichos porcentajes, que por demás fueron transcritos de forma errónea, no son acordes a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, pues tiene cierta vocación de inocuidad y que por ende, no generan ninguna afectación frente a los estratos subsidiables, toda vez que se ha venido cumpliendo con el propósito de los subsidios.

2.1.4 Informa que, a través del decreto que adopta la estratificación y la certificación expedida por el Secretario de Planeación se pone en conocimiento que en el municipio no existe inmueble alguno que por sus condiciones socioeconómicas haya sido merecedor de la clasificación en el estrato comercial o industrial, ni en el 4, 5 o 6.

2.1.5 Alega el recurrente un perjuicio irremediable a causa de un error de forma, que para ser subsanado, basta solo con revisar la información existente y producida durante la vigencia evaluada, para determinar, sin necesidad de variación jurídica alguna, que el municipio de Santiago, cumplió con las obligaciones establecidas por la Ley frente al manejo de los recursos del SGP para APSB.

2.1.6 Asimismo, invoca la prevalencia del principio de buena fe, según el cual *“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten antes estas”*. Lo anterior, por cuanto lo que sucedió se genera en cumplimiento de los preceptos legales, siendo clara la total ausencia de conductas dolosas o intencionales que al final pudieran conllevar a una sanción tan drástica como la descertificación.

2.1.7 Señala que *“(…) en aras de salvaguardar el Derecho Constitucional a la igualdad, solicita tener en cuenta de manera adicional que, ante situaciones similares, dicha Superintendencia ha*

aceptado la existencia de errores formales y ha permitido la certificación de municipios, como es el caso de varios del Departamento de Nariño.”

2.1.8 Finalmente indica que, la decisión tomada por la Superintendencia a través de la resolución de descertificación, de ser confirmada, por un error meramente formal que no generó ninguna afectación, produciría la continuidad de una grave dificultad administrativa y presupuestal para el municipio que actualmente se encuentra descertificado y con retrasos en las inversiones para el sector APSB, toda vez que el manejo de los recursos y el aseguramiento de la prestación a cargo del departamento, por evidentes razones, se ve dilatado, teniendo en cuenta las múltiples obligaciones dentro de dicho departamento, entre otros.

2.2 De los documentos aportados por el municipio

Aportó el ente territorial copia de los siguientes documentos:

- 2.2.1 Decreto No. 046.1 de la Oficina de Planeación de la Alcaldía Municipio de Santiago, de fecha 1° de septiembre de 1996.
- 2.2.2 Certificado de la Secretaría de Planeación del Municipio de Santiago- Putumayo, de fecha 17 de noviembre de 2016.

Los anteriores documentos con su valor legal se incorporan al expediente.

3. ARGUMENTOS DEL ENTE TERRITORIAL Y DOCUMENTOS APORTADOS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN, EN RELACIÓN CON EL CARGO “REPORTE AL SUI DEL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY 142 DE 1994”

3.1 De los argumentos del recurrente

3.1.1 Adujo el ente territorial que si bien se cargó el proceso licitatorio, el no cargue del acta que declare el cierre de la invitación, obedece a un error involuntario que en nada afecta la razón de ser del criterio, y que en su original reposa la resolución de cierre en el archivo de la entidad y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-.

3.1.2. Indicó que el municipio si creó la resolución de cierre de la Resolución No. 177 del 16 de mayo de 2016, la cual puede ser verificada en el proceso PCLP-001-04-2016 del SECOP, pero esta no fue cargada en el aplicativo INSPECTOR, debido al afán del municipio de dar cumplimiento al artículo 2.3.5.1.2. del Decreto 1077 de 2015 y la Resolución No. 0275 del 29 de abril de 2016.

3.1.1.4 Finalmente invoca que los errores objeto de argumento en el recurso de reposición, constituyen una situación de forma que no afecta el cumplimiento de las obligaciones que el municipio tiene, frente a los recursos del SGP -APSB, como son el equilibrio entre subsidios y contribuciones y el cumplimiento del agotamiento del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.

Por este motivo, asevera que mantener la decisión de descertificar al municipio de Santiago, sin verificar con la documentación aportada si efectivamente se cumplió con el aspecto a evaluar el según la Ley 1176 de 2007 y el Decreto 1077 de 2015, sería permitir que un yerro humano y en un sistema, mantenga una situación contraria a la realidad y sea el motivo para castigar a un municipio que oportunamente ha cumplido con sus obligaciones frente al asunto analizado, creando situaciones administrativas que se apartan de la realidad jurídica, que no es otra que el buen manejo de los recursos del SGP -APSB.

3.2 De los documentos aportados por el municipio

Aportó el ente territorial copia de los siguientes documentos:

- 3.1.1 Resolución No. 177 “Por medio de la cual se declara desierto el proceso de licitación pública No. PCLP-001-04-2016”
- 3.1.2 Registro único de Prestadores de Servicios Públicos -RUPS- de la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Santiago EMCOAAS E.S.P.

- 3.1.3 Acuerdo No. 005 del 29 de febrero de 2004 “Por medio del cual se crea el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de Orden Municipal para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo”.
- 3.1.4 Certificación del Tesorero Municipal, de fecha 16 de marzo de 2016, sobre el pago de subsidios para el servicio de aseo en la vigencia 2015.
- 3.1.5 Certificación del Tesorero Municipal, de fecha 16 de marzo de 2016, sobre el pago de subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado en la vigencia 2015.
- 3.1.6 Aviso de Convocatoria del Proceso de Licitación Pública No. 02 de 2016, para “Seleccionar una empresa de servicios públicos domiciliarios legalmente construida, para operar, administrar y prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado en el municipio de Santiago, departamento de Putumayo”.
- 3.1.7 Certificación del Tesorero Municipal, de fecha 17 de noviembre de 2016, sobre los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos.

4. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta Superintendencia Delegada procederá a analizar los argumentos expuestos, de la siguiente manera:

4.1 Del argumento relacionado con la presunta inexistencia de los estratos 5 y 6, y los usos comercial e industrial, en el Municipio de Santiago-Putumayo, para la vigencia 2015 y de haber cumplido con las disposiciones sobre los aportes solidarios establecidos en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.

Adujo el ente territorial que si bien en el Acuerdo Municipal No. 04 del 27 de febrero de 2015, se fijaron porcentajes de contribución para dichos estratos y usos, dichas clasificaciones socioeconómicas no existen en el municipio, razón por la cual dichos porcentajes no tienen ninguna relevancia pues resultan inaplicables.

Con relación al argumento en estudio, este Despacho se permite señalar lo siguiente:

La norma es precisa en regular las vigencias, los requisitos de certificación y los plazos para proceder acreditar los mismos. En efecto, el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015 establece, con relación al requisito que nos ocupa, lo siguiente:

<i>“Aplicación de la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”.</i>	<i>“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya”.</i>
--	---

En este orden de ideas, se tiene que el referido decreto expresamente indica la información que debe contener el documento a reportar por el ente territorial, a saber, el acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, **expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011** o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

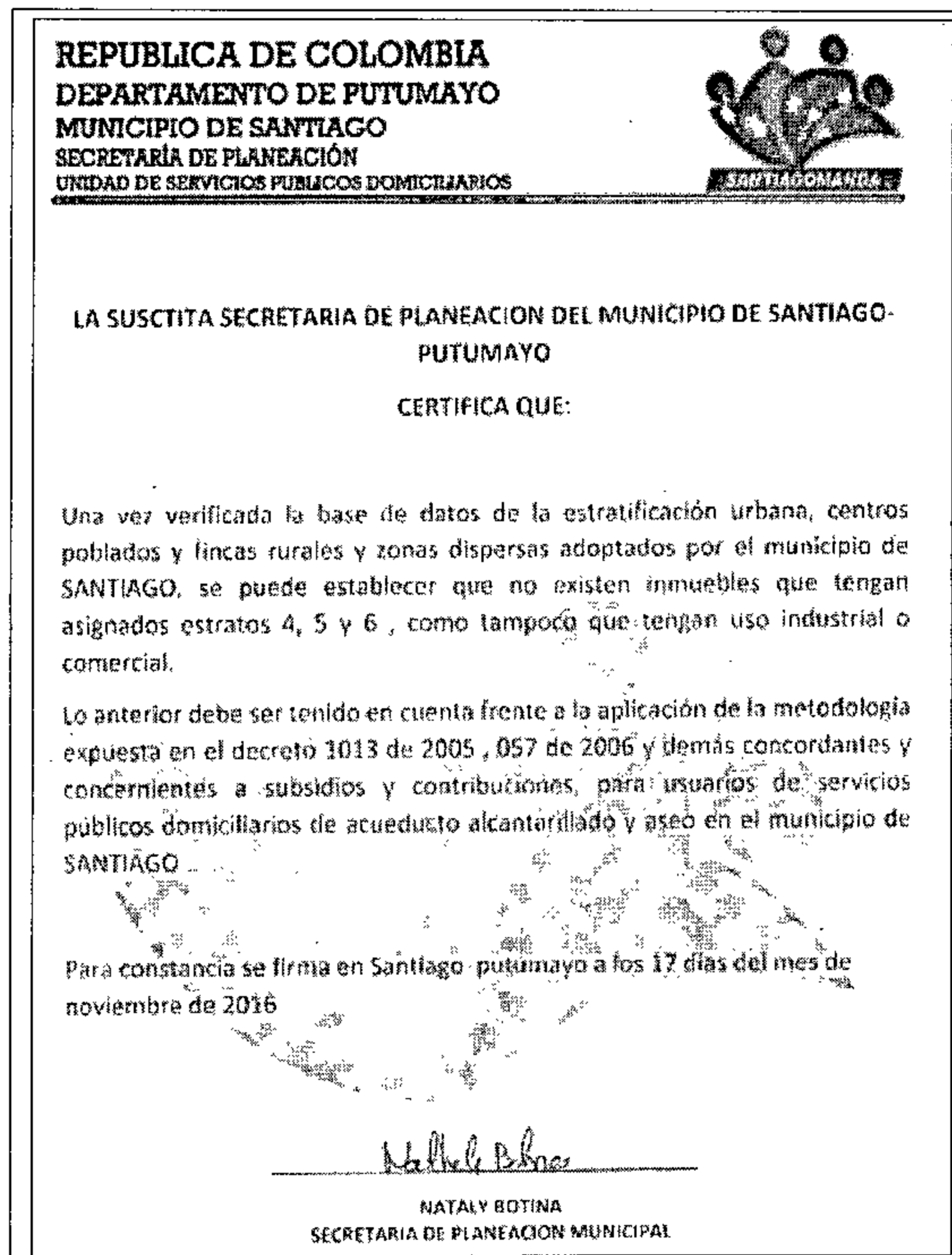
Por su parte, el artículo 125 *ibídem* señala:

“Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.

Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2o de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%)".

Ahora bien, para el caso concreto, **con relación al porcentaje de aporte solidario**, en la resolución de descertificación se indicó que en el Acuerdo No. 04 de 2015 se fijó el factor correspondiente a los estratos 5 y 6, y uso comercial e industrial, del 20%, lo cual para cada uno de los casos, es contrario a la normatividad antes descrita.

No obstante, este Despacho procedió a revisar el argumento del recurrente, que se basa en la Certificación de la Secretaría de Planeación del Municipio de Santiago- Putumayo, de fecha 17 de noviembre de 2016, veamos:



En este orden de ideas, es claro que el porcentaje fijado del 20% no cumple con lo establecido en la norma. Así las cosas, su argumento de que dicho valor carecería de aplicabilidad por no encontrarse estrato o uso alguno objeto de dicha reglamentación en el Municipio de Santiago, no tiene acogida por parte de este Despacho, toda vez que independientemente de la existencia de los estratos contribuyentes en el municipio, este debió fijar ajustado a la ley los porcentajes de aporte solidario, o en su defecto no fijarlos.

De otra parte cabe recordarle al recurrente que esta entidad, conforme al artículo 2.3.5.1.2.1.10 del Decreto 1077 de 2015, está facultada para definir sus protocolos para la revisión de la información y de los requisitos relacionados con la certificación de los municipios, para lo cual aplica las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo que se refiere a la actuación administrativa, notificaciones, pruebas y recursos. En ese sentido, bajo el análisis inicial de los documentos reportados, no se estimó pertinente decretar un periodo probatorio porque sin duda el acto administrativo transgredía flagrantemente la norma.

Al respecto, se le recomienda al ente territorial, que para efectos de próximas certificaciones en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB), ajuste su Acuerdo Municipal en lo referido, con el fin de que se establezcan inequívocamente los porcentajes de subsidios y aportes solidarios aplicables para los estratos y usos que efectivamente existan en su municipio, según lo establecido en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.

4.2 Del argumento relacionado con el presunto reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la ley 142 de 1994

Argumentó el ente territorial que, si bien se cargó el proceso licitatorio, el no cargue del acta que declare el cierre de la invitación de la Resolución No. 177 del 16 de mayo de 2016 obedece a un error involuntario y que dicha resolución reposa en el archivo de la entidad y en el SECOP, bajo el proceso PCLP-001-04-2016 y que el no cargue del acta de cierre solo se predica del sistema INSPECTOR de la Superservicios.

Con relación al argumento en estudio, este Despacho se permite señalar lo siguiente:

La norma es precisa en regular las vigencias, los requisitos de certificación y los plazos para proceder acreditar los mismos. En efecto, el artículo 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015 establece, con relación al requisito que nos ocupa, lo siguiente:

<i>“Cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994”, respectivamente”</i>	<i>“Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994”</i>
---	--

En este orden de ideas, se tiene que el referido artículo expresamente indica los requisitos que debe surtir el ente territorial cuando pretenda efectuar una prestación directa de servicios públicos, más aun, al haber ostentado la calidad de prestador directo al 31 de diciembre de 2015, a saber:

“Artículo 6o. Prestación directa de servicios por parte de los municipios. Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos:

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo;

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada;

6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación establecerán las metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos de prestación de servicios.

6.4. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio público, la contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para la prestación del servicio; y si presta mas de un servicio, la de cada uno debe ser independiente de la de los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen como autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los servicios quede sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras entidades prestadoras de servicios públicos.

En el evento previsto en el inciso anterior, los municipios y sus autoridades quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley misma, a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comisiones y al control, inspección, vigilancia y contribuciones de la Superintendencia de

servicios públicos y de las Comisiones. Pero los concejos determinarán si se requiere una junta para que el municipio preste directamente los servicios y, en caso afirmativo, ésta estará compuesta como lo dispone el artículo 27 de ésta ley.

Inciso reglamentado por el Decreto Nacional 398 de 2002. Cuando un municipio preste en forma directa uno o más servicios públicos e incumpla las normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan de modo general, o suspenda el pago de sus obligaciones, o carezca de contabilidad adecuada después de dos años de entrar en vigencia esta Ley o, en fin, viole en forma grave las obligaciones que ella contiene, el Superintendente, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad, además de sancionar los alcaldes y administradores, podrá invitar, previa consulta al comité respectivo, cuando ellos estén conformados, a una empresa de servicios públicos para que ésta asuma la prestación del servicio, e imponer una servidumbre sobre los bienes municipales necesarios, para que ésta pueda operar.

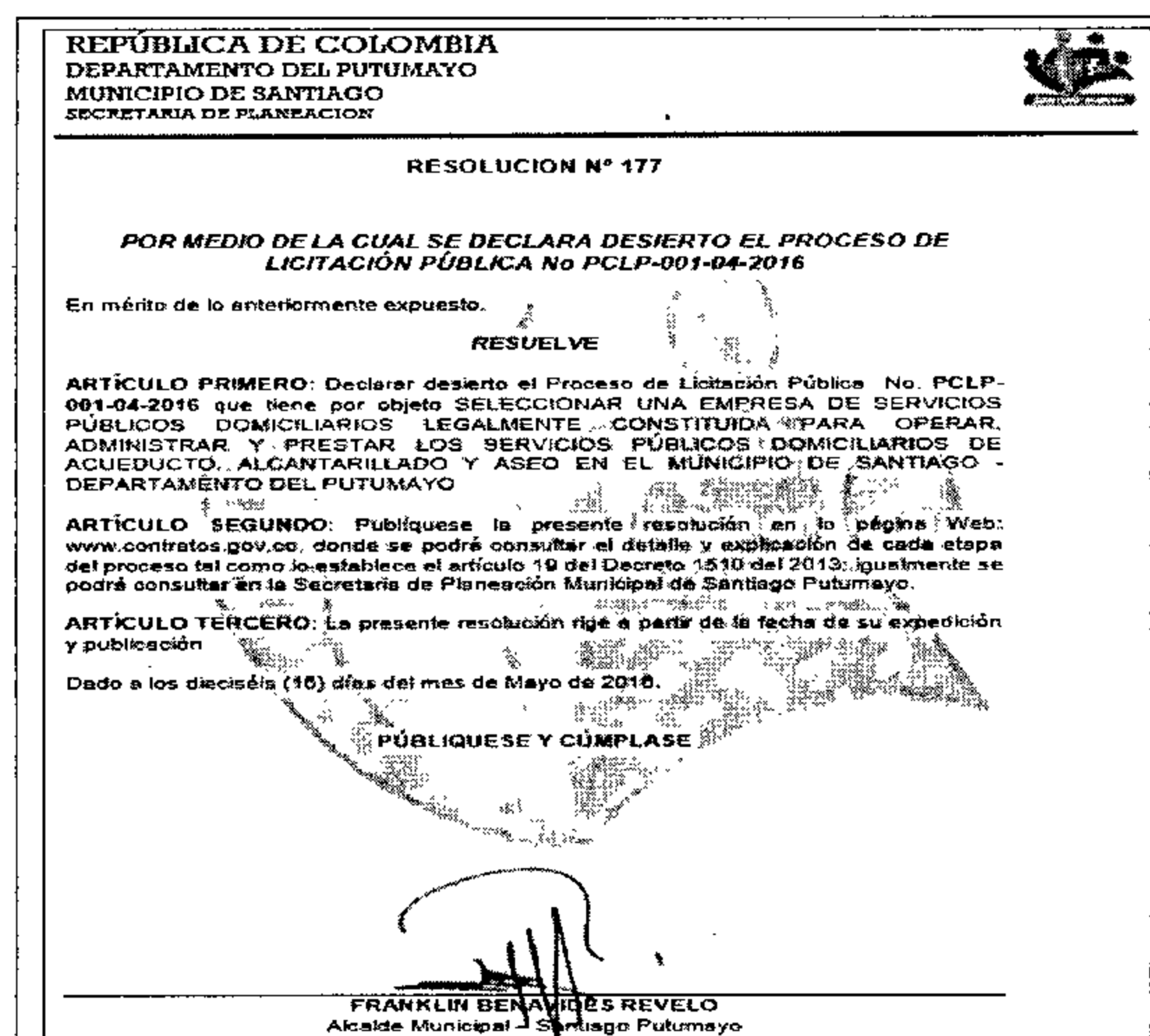
De acuerdo con el artículo 336 de la Constitución Política, la autorización para que un municipio preste los servicios públicos en forma directa no se utilizará, en caso alguno, para constituir un monopolio de derecho”.

Ahora bien, la resolución de descertificación fue clara al afirmar que efectivamente hubo una invitación (Invitación No. 01 del 14 de abril de 2016) dirigida a las empresas de servicios públicos domiciliarios para prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, y que fue debidamente suscrita y publicada en el SECOP. No obstante, se advirtió que no hubo acta que declarara el cierre expresa o tácitamente, y que la Resolución 535, reportada como acto administrativo que declara desierta la invitación, tiene fecha previa a la misma, esto es el 12 de noviembre de 2013, por lo que no corresponde a dicha invitación pública.

Así mismo, este despacho indicó que la Invitación No. 02 de noviembre de 2013, dirigida a los municipios, al Departamento del Putumayo, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar un esquema empresarial con el objeto de prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, si bien tiene reportada la Resolución 539 del 14 de noviembre de 2013, que declara el cierre de la misma, no tiene reportada la publicación.

En primer lugar, frente al primer argumento de la Superintendencia, en relación con el no reporte del acta que declare desierta la invitación del 2016, este Despacho procede a revisar la documentación remitida, particularmente la Resolución No. 177 “Por medio de la cual se declara desierto el proceso de licitación pública No PCLP-001-04-2016”, de fecha 16 de mayo de 2016.

Lo anterior, se evidencia en la Resolución en comento:



Esta resolución, en efecto, declara desierto el proceso de licitación No. 001-04.2016 y con ello, se tiene como subsanado el incumplimiento frente al reporte de un acto que declare desierta la

invitación. No obstante, se le recuerda que ser certificado en materia de administración de recursos del SGP-APSB, es responsabilidad únicamente del municipio, para lo cual este debe verificar la información a cargar en el SUI a fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos, según aplique.

Frente al segundo argumento de la Superintendencia, en relación al no reporte de la publicación de la Invitación No. 02 de noviembre de 2013, dirigida a los municipios, al Departamento del Putumayo, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar un esquema empresarial con el objeto de prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado; este Despacho se permite indicar que dentro del recurso de reposición impetrado, el recurrente no aportó la documentación que permitiera desvirtuar esta aseveración del despacho, razón por la cual no se analizará este cargo y se confirma el incumplimiento del ente territorial, en relación con el agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994.

Finalmente, es de señalar que la Circular Externa 01 del 26 de febrero de 2010, emitida por esta superintendencia, dispone que las invitaciones deben surtirse de manera secuencial, es decir que si se realizan de forma separada debe ser primero la invitación del numeral 6.1 y una vez haya sido agotado el procedimiento para la misma, se inicie el procedimiento para agotar el numeral 6.2, toda vez que ese es el orden que la misma ley demanda.

4.3 De los argumentos del recurrente relacionados con la buena fe y el debido proceso

Por otra parte, cabe recordarle al municipio que este Despacho siempre observa los principios generales y constitucionales, en la expedición de todos sus actos administrativos, particularmente el de la buena fe, que aunque se debe presumir en todo momento, no constituye justificación para sustraerse del cumplimiento oportuno y total de las normas de los administrados. Más aun, cuando con ocasión del recurso de reposición se indica que en total ausencia de conductas dolosas o intencionales, se generaría una sanción tan drástica como la descertificación del municipio, sobre lo cual resulta pertinente indicarle al ente territorial que la decisión de esta entidad no está fundamentada en una presunta mala fe, ni mucho menos busca imponer una sanción, dado que la naturaleza de este proceso no es de tipo sancionatorio.

En lo atinente al debido proceso y el derecho a la igualdad, que según el recurrente no se observó puesto que no se decretó un periodo probatorio que le permitiera subsanar las falencias encontradas, es menester indicar en primer lugar, que esta Superintendencia le comunicó al ente territorial oportunamente sobre el procedimiento y requisitos para obtener la certificación en mención, con el oficio SSPD 20164010094971 del 15 de febrero del 2012, en el cual se informaron las obligaciones de la administración municipal frente al cargue de información al SUI, para el proceso de certificación del SGP – APSB de la vigencia 2015.

Así mismo, el auto de apertura de la actuación administrativa No. SSPD 20164010009836, le fue comunicado con el oficio No. SSPD 20164010353081. Seguidamente y una vez analizada la información se profirió la resolución de descertificación No. SSPD 20164010056535 del 30 de septiembre de 2016, la cual se notificó personalmente el 11 de noviembre del 2016.

Con base en estas premisas, se advierte que se respetó el debido proceso al Municipio de Santiago, toda vez que se le comunicaron las actuaciones adelantadas dentro del proceso que nos ocupa y se le notificó la decisión que se adoptó con el objeto de que pudiera controvertirla; así pues es claro para esta entidad que lo que procura nuestro ordenamiento jurídico es que frente una decisión adversa para el interesado, este pueda ejercer los derechos que le asisten, situación que ha sido efectivamente garantizada, de ahí que el municipio haya interpuesto el recurso de reposición que hoy se resuelve, observando la oportunidad procesal que para el efecto ha dispuesto la ley.

En este sentido, que no se haya decretado en el presente asunto un periodo probatorio no constituye una violación a los derechos que el recurrente invoca, ya que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.3.5.1.2.1.10. del Decreto 1077 del 2015, la SSPD está facultada para definir sus protocolos de revisión de la información; no obstante conforme a lo expuesto en el párrafo que antecede, es claro que esta Superintendencia se ocupó de respetar el espacio legal de debate y de examinar los argumentos del impugnante sobre el particular, lo que demuestra a la vez un debido respeto por sus derechos.

Tampoco es cierto que "(...) ante situaciones similares, dicha Superintendencia ha aceptado la existencia de errores formales y ha permitido la certificación de municipios, como es el caso de varios del Departamento de Nariño", toda vez que, para prosperar el argumento del error involuntario de transcripción de los porcentajes del aporte solidario para los estratos y usos inexistentes en el municipio, el ente territorial debió allegar el acuerdo municipal por el cual se corrige el error de transcripción invocado, lo que no sucedió en el presente asunto.

Para finalizar, es importante poner de presente, que el proceso de certificación reviste una función administrativa y no sancionatoria; es decir, el presente proceso no tiene como fin establecer o determinar responsabilidades por la violación al régimen de servicios públicos domiciliarios e imponer una consecuente sanción, sino que esta Superintendencia se limita a evaluar la información que el municipio reporta para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 1077 de 2015, lo que a la postre deriva en la certificación o descertificación.

Así, de llegarse a la conclusión de que el municipio no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, los recursos del SGP – APSB destinados inicialmente al municipio descertificado, se transfieren al departamento respectivo para que este los administre. Vale aclarar que a pesar de que los recursos pasan a ser administrados por el ente departamental, este no puede variar la destinación inicial de los mismos, ya que es el encargado de realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios esenciales de agua potable y saneamiento básico en todo el municipio. Por esta razón, dicho proceso no se entiende como una actuación sancionatoria que implique un daño o detrimento patrimonial para el municipio descertificado.

En mérito de lo expuesto, el asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20164010056535 del 30 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

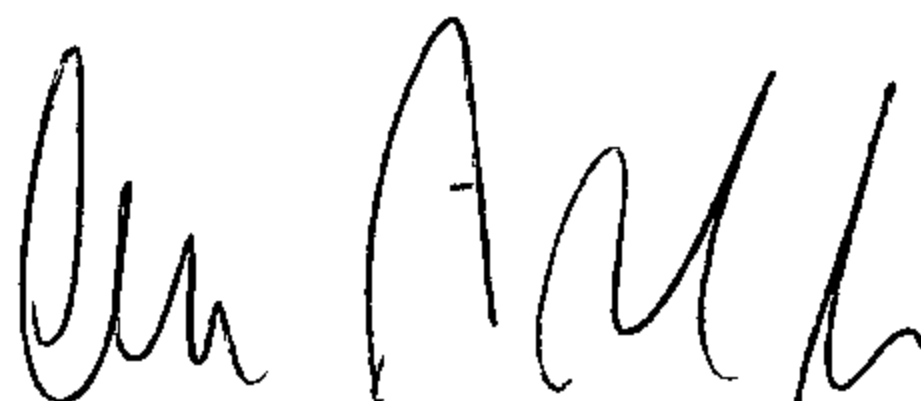
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al Alcalde del Municipio de SANTIAGO, del Departamento de PUTUMAYO, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de PUTUMAYO, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS

Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Diana Marcela Romero Rojas - Abogada DAAA

Revisó: Vanessa Benavides Quevedo - Abogada contratista - Grupo de Certificaciones e Información

Expediente No. 2016401351600246E